

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación de “Suministros e instalación de seis equipos de anestesia compuestos de respirador, módulo de gases y monitor hemodinámico para el Hospital Universitario Infanta Leonor”, número de expediente: 2019-0-018.

Con fecha 14 de enero de 2020 se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación de Getinge Gruop Spain S.L.U., formulando recurso especial en materia de contratación, contra la notificación efectuada por el órgano de contratación sobre la ejecución de la Resolución número 512/2019, de fecha 12 de diciembre acordada por este Tribunal.

El recurrente ante dicha notificación considera que se trata de la adjudicación del contrato y en base a ello, impugna dicho acto por entender que la documentación técnica aportada por la otra licitadora, desvelaba datos suficientes para evaluar dicha oferta, vulnerando en consecuencia el secreto de las ofertas.

Si bien el verdadero acto administrativo emanado del órgano de contratación, esto es la notificación de la ejecución de la resolución de este Tribunal ya referida no es un acto recurrible, con fecha 16 de enero se ha producido la publicación de la adjudicación del contrato, por lo que en aras de la eficacia administrativa, este Tribunal procederá a resolver sobre la pretendida nulidad de dicha adjudicación.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del presente recurso, fundamentándolo en el perjuicio que puede causar el conocimiento de las ofertas económicas y/o posterior adjudicación. Si bien como ya se ha manifestado dicho acto no es recurrible, este Tribunal considera



fundamental suspender el procedimiento, en tanto en cuanto ya ha sido adjudicado y la posible formalización del contrato haría perder el efecto útil del recurso especial en materia de contratación.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.



Por otro lado el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado de la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación similar.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

El artículo 56.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que las medidas cautelares podrán acordarse de oficio por el órgano competente en cualquier fase del procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de contratación autor del acto impugnado, por plazo de dos días.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de “Suministros e instalación de seis equipos de anestesia compuestos de respirador, módulo de gases y monitor hemodinámico para el Hospital Universitario Infanta Leonor”, número de expediente: 2019-0-018, hasta la resolución del presente



recurso, dando un plazo de dos días al órgano de contratación para que alegue lo que considere conveniente a su derecho.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0999890954127706712427**